



EL SUR-CENTRO

*Un plan para dismantelar la
inequidad multigeneracional y
restaurar la salud de la comunidad
en el Sur-Centro de Los Ángeles*

ENRAIZADO

Resumen Ejecutivo

El Sur-Centro de Los Ángeles, en los medios convencionales y en la mente de los que no trabajan ni viven aquí, a menudo se caracteriza por los violentos y caóticos puntos de su historia, incluyendo la Rebelión de Watts de 1965 y la Sublevación de Los Ángeles en 1992. Como demostraremos, estos eventos representan la culminación de las generaciones de abandono institucional y la explotación que le precedió. Hasta hoy en día, aunque en distintas maneras, este legado aún afecta a los habitantes del Sur-Centro de Los Ángeles en todos los aspectos de su vida diaria, desde la vivienda y el empleo, al transporte, la extrema vigilancia policial y el medioambiente. Esta privación general y agravada no se puede dismantelar por partes en el momento justo en el cual los residentes del Sur de Los Ángeles están cada vez más vulnerables a múltiples formas de despojo, arrinconamiento y olvido.

Desarrollado con el aporte de más de 30 organizaciones e instituciones comunitarias del Sur de Los Ángeles y 125 residentes líderes, quienes forman parte del colaborativo Building Healthy Communities (Construyendo Comunidades Saludables) del Sur de Los Ángeles, South Central Rooted (El Sur-Centro Enraizado) saca a la luz una historia de inequidad estructural y discriminación racial que abarca más de un siglo. Estas condiciones que persisten regularmente excusan la atención de los medios de comunicación convencionales y de funcionarios públicos; sin embargo, la prevalencia de esta desigualdad tiene consecuencias materiales en la salud y la calidad de vida de los residentes del Sur de Los Ángeles, desde la cuna hasta su sepultura (y muy a menudo, esta es una sepultura prematura).

Aunque la historia del Sur de LA es la de ser un campo de prueba para políticas racistas, también ha sido un verdadero laboratorio para soluciones innovadoras. Las raíces de la resistencia del Sur de LA son muy profundas. Y a nuestro parecer, las áreas en donde se ha progresado en el Sur de LA, éste ha sido liderado en gran parte por personas de la misma comunidad—líderes de base, organizadores comunitarios y residentes locales—quienes se han unido para exigir un cambio. Muchas de las herramientas, estrategias y narrativas que los líderes del sur de Los Ángeles desarrollaron y utilizaron—previamente consideradas demasiado radicales—han sido adoptadas por nuestros compañeros del movimiento en otras ciudades y hasta por legisladores. Esto se debe a que los líderes de base del sur de Los Ángeles reconocen que la respuesta se centra en un sistema de cambio interseccional impulsado por la comunidad. Basándose en la investigación y el conocimiento de la comunidad, este informe identifica dónde han fracasado las falsas soluciones, en dónde han habido logros y en donde se encuentran las oportunidades futuras para el Sur de LA.

Este informe explora un marco para entender cuáles son las causas de raíz que se intersectan, subrayando cuatro principales “impulsores de la desigualdad” en el Sur de LA:

- Aburguesamiento, Desalojo y Sinhogarismo;
- Pobreza, Desinversión y Desempleo;
- Vigilancia Policial, Supresión, Deportación y Encarcelamiento Masivo; y
- Racismo Ambiental.

Además de este análisis de causas de fondo, incluimos también una perspectiva desde la equidad en la salud para mostrar las consecuencias tangibles, del día a día, que afectan la capacidad de los residentes para disfrutar de una vida plena y participar de forma significativa en sus comunidades. Este enfoque se presta para poder realizar un análisis interseccional que toma en cuenta una variedad de factores y sistemas que impactan la salud individual y comunitaria. Además, en años recientes, el planteamiento sobre la equidad en la salud ha logrado una credibilidad crítica tanto dentro del gobierno como en la filantropía. Se ha convertido en un marco poderoso para que nuestros aliados en estos sectores puedan verdaderamente abordar los retos complejos a los que se enfrentan las comunidades como el Sur de Los Ángeles y desarrollar soluciones duraderas.

En cada capítulo, el informe explora la investigación y los



antecedentes que explican cómo cada impulsor impacta la disparidad en la salud en general y en el Sur de LA en particular, la historia de las causas de raíz, otros factores contribuyentes actuales y campañas y estrategias locales para abordarlas. A lo largo del informe, identificamos cómo esos factores y estrategias se revelan en múltiples impulsores de desigualdad. Esperamos que este análisis fomente una nueva reflexión y diálogo entre líderes estructurales, financiadores, organizadores y defensores, sobre la necesidad de marcos interseccionales para transformar las condiciones en el Sur de LA y comunidades similares en todo el país.

Aburguesamiento, Desalojo y Sinhogarismo

Datos recientes muestran que el 63% de los hogares en el Sur de LA gastan 30% o más de sus ingresos en la vivienda, más que en otras áreas de planificación de servicios del condado de Los Ángeles, sin virtualmente ningún cambio desde los años de la Gran Recesión. Los aumentos en los alquileres también se han dado de forma más aguda en el Sur de LA que en Los Ángeles en general. Como resultado, en 2015, uno en diez adultos en el Sur de LA pasó por una inestabilidad de vivienda. En el Distrito 9 del Concejo de la ciudad de Los Ángeles, el cual incluye el Corredor Figueroa en donde el aburguesamiento ha sido impulsado por la Universidad del Sur de California y otros desarrolladores privados, el sinhogarismo aumentó en un 44% en 2016 (el mayor incremento entre los 15 distritos en la ciudad en ese año) y en otro 11% en 2017.

Cada vez más, las familias con hijos están cambiando el rostro del sinhogarismo, especialmente en el Sur de LA, en donde el aumento del sinhogarismo entre los jóvenes ha superado con creces todas las demás categorías de edad. En el Distrito 8 del Concejo de la ciudad, por ejemplo, más de 1 de cada 4 personas sin viviendas tienen menos de 24 años de edad. Mientras tanto, los afroamericanos siguen teniendo una representación excesiva en la población de personas sin viviendas. Las mujeres y las personas trans y las personas de género no conforme de todas las edades que no tienen vivienda enfrentan riesgos mayores a pasar por traumas adicionales, como la violencia, la trata, el abuso de sustancias y el hostigamiento policial.

Las personas sin viviendas están expuestas a más problemas de salud física y mental que las personas que tienen viviendas, pero es menos probable que tengan una fuente regular de cuidado o recursos para manejar sus condiciones médicas. Los hallazgos de investigaciones han sugerido que las personas sin viviendas podrían tener una expectativa de vida de 30 años menos que la de sus contrapartes con viviendas. Aun aquellas personas que han podido evitar el sinhogarismo en el Sur de LA pueden verse arrinconadas en los barrios vecinos menos codiciados de la ciudad, los cuales con probabilidad son desiertos alimenticios, con calles menos caminables, con contaminación por estar cerca de autopistas y zonas industriales y hacinamiento. Todos estos factores los hace más vulnerables al cáncer, asma, diabetes y trastornos cardiovasculares.

La situación precaria de las viviendas en el Sur de LA está vinculada a una larga historia de desarrollo excluyente y otras políticas discriminatorias de las cuales son objeto las personas de color. Un documento de síntesis presentado por el Concejales Harris-Dawson (Distrito 8) afirmaba, “Por casi 60 años, las políticas en todos los niveles de gobierno han contribuido a una desaparición de redes de protección social, la pérdida de viviendas asequibles, el crecimiento del encarcelamiento masivo, la disminución de empleos de la clase media y la destrucción del cuidado de salud mental.”



La discriminación en las viviendas, como lo es la práctica de “redlining,” o el rehusarse a otorgar préstamos bancarios en zonas particulares, a sectores particulares de la población y la práctica de “racial covenants,” que son las cláusulas restrictivas en base a la raza que confinaron a muchos residentes afroamericanos a una pequeña zona del Sur de LA en la primera mitad del siglo 20, cuando las personas blancas aún dominaban la región. La economía en tiempo de la guerra y el deseo de huir del sur y de las leyes “Jim Crow” seguían impulsando el crecimiento de la población afroamericana, lo cual llevó a que la ciudad construyera proyectos de viviendas públicas en el Sur de LA, los cuales resultaron ser inferiores, aun para los estándares de esos tiempos. Sin embargo, el sector incipiente manufacturero y la apertura al sector público para la comunidad afroamericana permitió el desarrollo de una clase media negra en ese momento.

Sin embargo, en los años sesenta, la fuerza policial se volvió un instrumento para mantener a la comunidad negra en su lugar mediante un estilo agresivo de vigilancia policial, incluyendo el fichaje y discriminación racial, promovido y defendido por el entonces Jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, (LAPD, por sus siglas en inglés), William Parker. La policía, esencialmente, impuso la segregación en el Sur de LA, justo cuando en los tribunales se prohibieron las formas más explícitas de discriminación en las viviendas. El auge de la posguerra había expandido los mercados de viviendas y de automóviles privados, permitiéndole principalmente a familias blancas mudarse de las ciudades a los nuevos suburbios. Se sumó a esto la salida de las industrias y de las inversiones públicas. La confluencia del desempleo crónico, la segregación residencial y la pobreza racializada llegó a su punto máximo en la Rebelión de Watts de seis días en 1965.

El Sur de LA formaba parte de un modelo nacional más amplio de desindustrialización y abandono de los barrios dentro de las zonas urbanas que continuó hasta los años setentas. Con una base tributaria reducida, mermaron los servicios

básicos para el resto de los residentes, cuya pobreza estaba demasiado atrincherada como para poder mudarse. El Sur de LA se convirtió en terreno fértil para una economía informal de robo, drogas y prostitución. Muchos residentes que fueron victimizadas por esta economía, como los consumidores de drogas y sexoservidores, también fueron criminalizadas a causa de ello. La epidemia del crack de los años ochenta avivó las tensiones entre pandillas contrarias y dio más autoridad al LAPD para aplicar tácticas violentas.

El abandono del Sur de LA dejó una apertura para personas recién llegadas a la región, incluyendo inmigrantes asiáticos y latinx, quienes llenaron nichos poco deseados en la economía estratificada, los cuales les habían sido negados a residentes afroamericanos que llevaban muchos años en la comunidad. Para 1992, cuando la absolución de cuatro oficiales de LAPD que fueron grabados en video apaleando a un motorista negro, de nuevo desencadenó más disturbios, el levantamiento se extendió a lo largo de una geografía mucho más amplia y dejó en claro que los afroamericanos no eran los únicos residentes del Sur-Centro de Los Ángeles languideciendo bajo un sistema de criminalización y exclusión económica.

Estas décadas de privación económica sistémica y de exclusión en las viviendas son importantes para poder comprender la crisis de viviendas en el Sur de LA. Típicamente, las familias de clase media, sobre todo las que son dueñas de sus hogares, pueden construir su patrimonio y heredar su riqueza a futuras generaciones. Éste no es el caso para la mayoría de los residentes de raza negra en el Sur de LA. A pesar de que el valor de bienes raíces se desplomó desde los años sesenta, los arrendatarios afroamericanos (de hecho, ni los inmigrantes latinx recién llegados), no pudieron acumular suficiente patrimonio generacional para poder comprar propiedades vacantes del Sur de LA. Lo que resulta peor es que la crisis en los préstamos hipotecarios de alto riesgo que empezó a fines de los años 90 y llevó a la Gran Recesión una década después afectó de manera desproporcionada a las personas de color. Las prácticas de préstamos usureros resultaron en juicios hipotecarios entre muchos afroamericanos y latinx propietarios de viviendas que quedaban en el Sur de LA, obligándolos a convertirse en arrendatarios dentro del mercado inmobiliario. Los estudios muestran que las áreas en el Sur de LA con altos índices de préstamos de alto riesgo también estaban altamente correlacionadas con altos índices de desalojo. Además de no poder acumular riqueza, en su conjunto, los residentes del Sur de LA de hecho perdieron la riqueza que les podría ayudar a superar tal crisis económica. Por si eso fuera poco, un posible comprador excepcional de vivienda en el Sur de LA podría enfrentar más discriminación por parte de bancos que cobran tasas de interés y cuotas más altas a prestatarios de grupos minoritarios o que orientan a los mismos a pedir préstamos hipotecarios de alto riesgo más costosos.

Con más frecuencia, las propiedades del Sur de LA, cuyas hipotecas habían sido anuladas o sido abandonadas, fueron rescatadas por terceros más poderosos, incluyendo desarrolladores, la Universidad del Sur de California y empresas de propiedad privada que se han convertido en arrendadores

virtuales de muchas familias de clase trabajadora en el Sur de LA. La expansión del tren ligero del Metro con servicio en el Sur de LA también hizo más atractivos a los barrios vecinos para esos desarrolladores. En simples términos, el efecto secundario de la Gran Recesión fue la transferencia de riqueza de los dueños de propiedades de color en el Sur de LA a las corporaciones.

La privatización del mercado del alquiler seguirá amenazando por muchos años más la estabilidad de la vivienda para los residentes que siguen en el Sur de LA. Las empresas de propiedad privada, como Blackstone Group, ven sus nuevas propiedades como inversiones de corto plazo. Documentos internos muestran cómo maximizan sus ganancias al no mejorar las condiciones de vida en estos arrendamientos y, como especuladores, venden estas propiedades al mejor postor cuando mejora el mercado inmobiliario. En este último caso, los desalojos son inevitables.

Las viviendas asequibles pueden aminorar el desplazamiento y la inestabilidad de viviendas en el Sur de LA, pero la oferta de viviendas ha ido disminuyendo, especialmente a partir de la desaparición de la Agencia de Reurbanización Comunitaria en 2011. Los Ángeles perdió la mayoría de su financiación federal y estatal para las viviendas asequibles desde por lo menos a partir 2009, ampliando así la brecha en materia de vivienda en la ciudad. No se trata únicamente de que no se están construyendo nuevas viviendas asequibles, sino que también están desapareciendo las reservas existentes de viviendas asequibles. El Acta de Arrendamiento de Vivienda Costa-Hawkins de 1995 exime a ciertas viviendas arrendadas del control de alquileres, inclusive a aquellas viviendas construidas después de octubre de 1978 y las viviendas unifamiliares. A medida que las viviendas antiguas son demolidas para dar paso a nuevos desarrollos, el número de viviendas de renta controlada seguirá disminuyendo con el tiempo.

Además, desde que el mercado inmobiliario se recuperó de la Gran Recesión, el condado de Los Ángeles ha visto un recrudescimiento en el hostigamiento de arrendatarios como manera de presionar a inquilinos para que desalojen sus viviendas. El Acta de Ellis de 1995, la cual permite a los arrendadores salir del mercado de alquiler con la venta de sus propiedades o al convertirlas en condominios a precio de mercado, ha sido solicitada de manera exagerada por desarrolladores queriendo transformar sus propiedades—y no por los arrendadores locales a quienes se suponía que la ley debía ayudar. Desde 2001, los desalojos bajo el Acta Ellis han eliminado 22,132 unidades de vivienda asequible con alquiler estabilizado en Los Ángeles. Si no se da una intervención, es probable que ese número aumente en el mercado inmobiliario actual. La proliferación de alquileres a corto plazo, como AirBnb, también está invadiendo el Sur de LA, disminuyendo aún más las unidades de alquiler disponibles, a la vez que aumenta los costos de alquiler.

El hacinamiento se ha vuelto un último recurso para muchas familias del Sur de LA que buscan no terminar en la calle. El Sur de LA tiene algunas de las regiones (por código postal) más superpobladas en los Estados Unidos. En general, el hacinamiento se correlaciona con la pobreza y las malas condiciones

de vida. Los estudios también vinculan el hacinamiento con problemas de salud física y mental, incluida una exposición más probable a enfermedades infecciosas.

Aunque la reinversión podría ser un regalo del cielo para una comunidad que ha sufrido una fuerte desatención durante décadas, tanto los datos como la experiencia apuntan a que sin una oferta permanente de viviendas asequibles, es más probable que las urbanizaciones más nuevas causarán el aburguesamiento de estos barrios, aumentarán los alquileres, y desplazarán a residentes que quedan, dando paso a residentes con ingresos más altos, y en muchos casos, a gente blanca. Por esta razón, los residentes y líderes del Sur de LA han estado al frente de campañas que exigen que proyectos de urbanización den prioridad a las personas por encima del capital, sobre todo a aquellas personas que han permanecido en el Sur de LA a lo largo de los años de escasez. Estos líderes han construido coaliciones sólidas y han utilizado herramientas tales como acuerdos de beneficios comunitarios y acuerdos para hacer que los desarrolladores inmobiliarios se responsabilicen del bienestar de los residentes y detener la oleada de desalojos. Algunos beneficios concretos de estos acuerdos han incluido la contratación local, financiación para viviendas asequibles y clínicas, y apoyo para negocios comunitarios. Los líderes del Sur de LA también han abogado de manera exitosa durante el reciente proceso para actualizar la planificación comunitaria en Los Ángeles, la cual consiste de planes de desarrollo en la región, en pro de protecciones para arrendatarios y de oportunidades económicas para

dueños de pequeñas empresas.

A la misma vez, las organizaciones del Sur de LA están colaborando con respecto a estrategias integradas para la participación de votantes con el fin de desarrollar una base más amplia de votantes de Los Ángeles a favor de políticas progresistas y desarrollo equitativo. Como resultado, en 2016, los votantes aprobaron con mayoría abrumadora una medida de desarrollo de vivienda asequible que requiere la contratación de trabajadores locales con los salarios vigentes, así como un bono de vivienda para personas sin hogar de \$1.2 mil millones. En 2018, 63% de los votantes de California aprobaron la Propuesta 2 para utilizar los ingresos de un impuesto a millonarios para prevenir el sinhogarismo y cubrir costos de servicios para la salud mental. Y a pesar de que la Propuesta 10, la cual habría permitido que gobiernos locales adopten el control de alquileres para cualquier tipo de vivienda, fracasó en esta misma elección de mitad de período, los votantes del condado de Los Ángeles se dividieron por igual en el tema a pesar de los millones gastados en publicidad engañosa por parte de la oposición.

Dada la historia de abandono, nuestros residentes y líderes están alertos para asegurarse de que el Sur de LA reciba su parte justa de la financiación para un desarrollo equitativo de estas y otras medidas aprobadas por los votantes. También están preparados para organizar y abogar por protecciones contra el desalojo en los nuevos desarrollos, como la construcción de un estadio de fútbol y otras zonas de interés para los Juegos Olímpicos que la ciudad albergará en 2028.



Pobreza, Desinversión y Desempleo

Los cambios estructurales de gran escala descritos en el impulsor de desigualdad anterior han llevado a un aumento en el desempleo y la pobreza. Y aun cuando tienen empleos, los trabajadores del Sur de LA son objeto de salarios bajos, acuerdos de empleo no convencionales y una creciente desigualdad en los ingresos. La pobreza limita el acceso a las viviendas y educación de calidad, a las oportunidades económicas y a los alimentos saludables, generando un ciclo de adversidad difícil de esquivar. A la pobreza concentrada en el Sur de LA le sigue siendo moldeada por el legado de segregación residencial racial y la desinversión y se vincula a: una falta de oportunidades de calidad educativas y de empleo; la exposición a la violencia, el crimen y el aumento en la vigilancia policial; altos índices de encarcelamiento; niveles elevados de trauma y estrés psicológicos; la desestabilización del apoyo familiar y comunitario; y los efectos de un estado de salud deficiente.

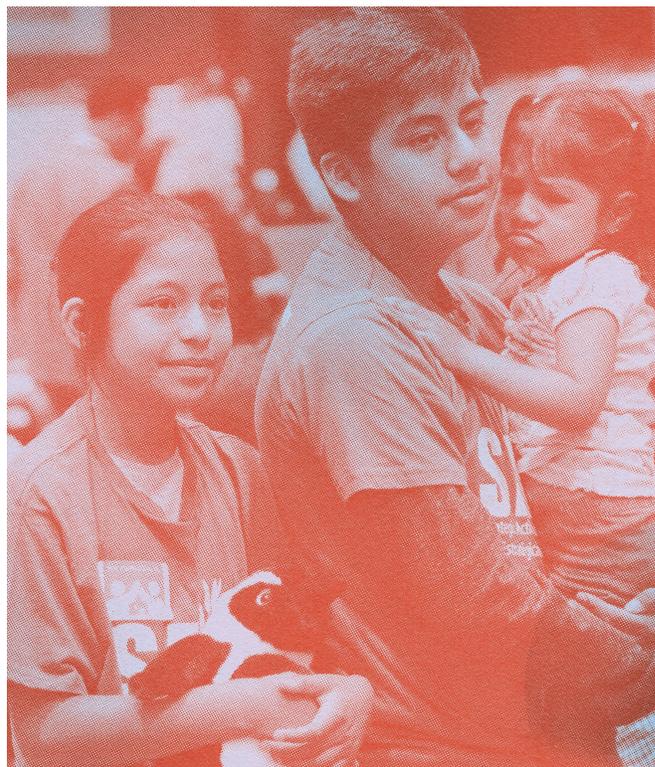
En 2015, el 34% de los residentes del Sur de LA vivía por debajo del umbral federal de pobreza, casi el doble de la tasa en el condado de Los Ángeles (18%), representando además un aumento del 31% en 2011. El Sur de LA tenía un ingreso personal medio de \$17,988, comparado al de más de \$30,000 para el condado de LA. La tasa de desempleo posterior a la recesión ese año fue del 14% en el Sur de LA, la mayor tasa entre todas las áreas de planificación de servicios en Los Ángeles. El subempleo también prevaleció. Los residentes enfrentan barreras sistemáticas para percibir empleo pleno, las cuales incluyen: un dominio limitado del inglés, la falta de licencias de conducir o ciudadanía, la falta de educación, previas condenas, la falta de transporte y la discriminación racial. Incluso los residentes del Sur de LA que trabajaban a tiempo completo ganaron alrededor de 60 centavos por dólar en 2016, en comparación al trabajador promedio del condado de LA. Estancados frecuentemente en trabajos de servicio de nivel básico o de bajos salarios, hasta los trabajadores a tiempo completo están excluidos del ascenso laboral en sectores de expansión clave en Los Ángeles.

Además de enfrentar barreras en el empleo, los residentes del Sur de LA también tienen un acceso limitado a los recursos financieros, como lo son las cuentas corrientes convencionales, y se amparan en el comúnmente depredador “panorama marginal de préstamos,” incluyendo lugares para el cobro de cheques, créditos rápidos (“payday loans”), financiaciones de alquiler con opción de compra, casas de empeño y tarjetas de crédito pre-pagadas, teniendo esto como resultado una relación deuda-ingresos más alta que el resto del condado. Debido al alto nivel de vigilancia policial y criminalización de las que es objeto el Sur de LA, sus habitantes se ven desproporcionadamente agobiados por deudas del sistema de justicia penal, como los pagos de fianzas.

Las condiciones económicas del Sur de LA se caracterizan

por una historia de desindustrialización y desinversión detalladas más a fondo en los primeros dos capítulos de este informe. Durante la Segunda Guerra Mundial, una creciente escasez laboral y demandas en el sector de la defensa, en conjunto con una orden ejecutiva prohibieron la discriminación racial en la industria de la defensa y dieron paso a nuevas oportunidades de empleo para personas de color en el Sur de LA. La economía de posguerra de LA, en una era de sindicalismo masivo (sobre todo en los sectores públicos y manufactureros), permitió que algunos trabajadores de color se incorporaran a la clase media. Sin embargo, empezando en los años 60, grandes cambios económicos interrumpieron el crecimiento sindical y salarial de la posguerra, a medida que las empresas manufactureras empezaron a cerrar sus fábricas y a trasladarse a otras partes del país, y eventualmente al extranjero para aprovechar la mano de obra barata y no sindicalizada. Como resultado, se desestabilizó la fuerza laboral en el Sur de LA, tanto en número como también en salarios. En 1960, más del 20% de los trabajadores negros de Los Ángeles estaban contratados en el sector manufacturero. Para 2014, esta cifra se había reducido a solo el 5%.

El declive de la economía del Sur de LA también tuvo como respuesta la huida de residentes blancos hacia los suburbios, y a la vez partieron también las inversiones públicas y privadas y disminuyeron los ingresos fiscales. En conjunto, la desindustrialización, la desinversión y la reducción del sector público crearon una economía del Sur de LA que hasta la actualidad se caracteriza por limitados servicios públicos y gastos en infraestructura, condiciones de pobreza arraigadas y la expansión de prácticas de explotación, como los créditos rápidos y empleos de bajos sueldos y a tiempo parcial. Bajo esta economía, los trabajadores inmigrantes latinx están confinados a empleos



vulnerables y de bajos sueldos del sector de servicios, mientras que muchos trabajadores negros quedan totalmente excluidos del mercado laboral. Incluso cuando están calificados, los trabajadores negros enfrentan prácticas de contratación discriminatorias, o cuando son empleados, enfrentan desigualdades salariales. Los servicios públicos y la financiación, que a menudo pueden estimular el crecimiento económico local, siguen rezagados en el Sur de LA, en comparación con el resto de la ciudad, pese a datos que demuestran irrefutables desigualdades económicas en la región.

El desempleo y el subempleo es parte de un círculo vicioso que incluye la hiper-criminalización (el tema del próximo impulsor) y mantiene a muchos residentes del Sur de LA en una pobreza perpetua. La falta de empleos sostenibles crea una economía informal que deja a muchos residentes del Sur de LA vulnerables a la violencia de las pandillas y al abuso policial. En un ambiente de vigilancia excesiva, los residentes del Sur de LA se ven inmersos desproporcionadamente en el sistema de justicia penal. Una vez cargados de antecedentes penales, muchos residentes del Sur de LA quedan excluidos del empleo bien remunerado y recurren irremediabilmente o permanecen atrapados en una economía informal.

Contra tales ataques incesantes a las oportunidades económicas de los residentes del Sur de LA, ambos líderes y organizadores del Sur de LA han desarrollado estrategias innovadoras que a menudo sirven de modelo para otros centros urbanos. Por ejemplo, la organización comunitaria ardua condujo a la implementación de dos programas para el desarrollo de la fuerza laboral en empleos verdes por parte de agencias públicas locales: el Programa de Fuerza Laboral y Reacondicionado Energético y un programa de pre-aprendizaje en el sector de servicios públicos (UPCT, por sus siglas en inglés), los cuales incluyeron contrataciones focalizadas, capacitaciones remuneradas, representación sindical y el desarrollo de trayectorias rumbo a carreras profesionales para residentes de bajos ingresos.

Además, en 2012, la Agencia Metropolitana de Transporte de Los Ángeles (Metro) adoptó un acuerdo de 5 años que, aunado a una Política de Carreras en la Construcción para proyectos en el transporte del Sur de LA, hizo vigente un acuerdo maestro para la mano de obra en el proyecto (PLA, por sus siglas en inglés) — el primer acuerdo en su tipo para una agencia de transporte regional. El acuerdo incluía un requisito para la contratación focalizada de un 40% de trabajadores de zonas postales de alta pobreza, entre otras concesiones por parte de la agencia. Recientemente, líderes comunitarios lanzaron un Proyecto de Cumplimiento y Monitoreo Comunitario para garantizar la fidelidad al acuerdo por parte de Metro.

Con el fin de eliminar las barreras al empleo en una comunidad excesivamente criminalizada como el Sur de LA, activistas abogaron exitosamente en Los Ángeles para implementar la ordenanza de la Iniciativa de Oportunidades Justas en la Contratación. Al impedir que las dependencias gubernamentales y sus contratistas requieran historiales de antecedentes penales en las solicitudes de empleo, la ordenanza crea un nivel de equidad entre las muchas personas anteriormente encarceladas. Los líderes del Sur de LA también hicieron una campaña vigorosa a favor de la Propuesta 47, la cual fue aprobada por los votantes de California con amplio apoyo en 2014. La ley reduce siete delitos no graves y no violentos a categoría de delitos menores. Muchas de las personas con condena previa por un delito de este tipo pueden eliminar su historial, lo cual aumenta sus posibilidades de empleo.

A lo largo de los años, organizadores comunitarios en el Sur de LA han trabajado sin cesar para cambiar las narrativas acerca de la pobreza sistémica y el desempleo en barrios de la ciudad con el fin de lograr concesiones y cambios en la ley. Ya sea que estas estrategias se enraícen y dispersen lo suficiente como para tener impacto sobre otros sectores laborales, dependerá en parte del próximo impulsor de desigualdad en el Sur de LA: la vigilancia policial, el encarcelamiento y la deportación.



Photo by Mike Dennis

Vigilancia policial, Supresión, Deportación y Encarcelamiento Masivo

La vigilancia policial violenta, que a menudo conduce al encarcelamiento excesivo y a la deportación de inmigrantes, ha afectado a barrios de la ciudad como el Sur de LA durante muchas décadas, pero en los últimos años las muertes de personas de color de alto perfil, especialmente de afroamericanos, en manos de las fuerzas del orden, han elevado este tema a la atención general y académica. La Asociación Americana de Salud Pública (APHA, por sus siglas en inglés) considera el hostigamiento policial como un problema de “salud pública” que “afecta desproporcionadamente a las personas de color y otras comunidades marginadas, como inmigrantes, las personas sin hogar, los miembros de la comunidad LGBTQ e individuos con enfermedades mentales”. El Instituto Vera para la Justicia define el encarcelamiento masivo como una “epidemia” y los estudios muestran que el encarcelamiento empeora las disparidades de salud durante el aprisionamiento de una persona y después de su liberación.

La vigilancia policial agresiva no solo afecta a las personas al estar encarceladas; más bien, la vigilancia inescapable de una comunidad crea un ambiente estresante que puede ocasionar angustia psicológica, sentimientos de ansiedad, insignificancia y nulidad y otros problemas de salud mental y física entre los residentes. El encarcelamiento masivo agrava el problema de pobreza descrito en el anterior impulsor de desigualdad, tanto a nivel individual como comunitario.

Aunque los arrestos por el LAPD disminuyeron entre 2010 y 2015, posiblemente debido a una mayor conciencia pública respecto a la represión policial en comunidades de color, esta disminución no ocurrió en todos los sectores de la población. Las personas sin hogar, entre las cuales las personas de color

tienen una sobrerrepresentación, tenían 17 veces más probabilidades de ser arrestadas que las personas con hogar. Las personas transgénero y de género no conformes también presentan altas tasas de hostigamiento a manos de la policía.

Los jóvenes a diario sufren los efectos cumulativos del exceso de vigilancia policial. Son objeto de sanciones contra las pandillas, incluso sin haber evidencia de participación en las pandillas. No es rara la suspensión o la expulsión, o incluso el arresto de los estudiantes en la escuela, por conductas que, en caso de tratarse de un estudiante blanco de los suburbios, resultarían solamente en una simple visita al consejero. El uso excesivo de estas medidas disciplinarias lleva a sacar, a la “exclusión” de estudiantes de la escuela, lo que a su vez reduce los ingresos futuros y el nivel educativo de estos jóvenes. Además, arrestar a los estudiantes, o ponerlos en libertad condicional, ocasiona que los fichen, (o la llamada cadena de la escuela a la prisión) un flujo directo entre la escuela y la cárcel. Lo más trágico es que el Sur de LA también ha sido testigo de los brutales asesinatos públicos de jóvenes residentes por parte de la policía.

La comunidad inmigrante se ve doblemente victimizada por la integración de los sistemas de aplicación de la ley de inmigración y justicia penal. Como resultado, muchos han sido criminalizados bajo la jurisdicción de los tribunales de inmigración y se les ha negado protecciones del debido proceso del sistema de justicia penal, como el derecho a un abogado, un juicio rápido o servicios de interpretación. Los inmigrantes podrían ser detenidos durante meses y, en ocasiones por más de un año—más tiempo aun del que son detenidos los que han cometido crímenes violentos—y podrían ser obligados arbitrariamente al confinamiento solitario o a condiciones de vida inhumanas en los centros de detención. Muchas de estas instalaciones son operadas por empresas privadas cuyo objetivo principal es aumentar sus márgenes de ganancias, maximizando el número de detenidos y reduciendo costos, incluso servicios vitales, a expensas de la salud, la seguridad y el bienestar general de las personas bajo su custodia. Las mujeres y los reclusos LGBTQ también sufren abuso físico y acoso sexual tanto del personal como de otros reclusos.

La presencia policial satura los espacios en el Sur de LA, donde los residentes acceden a servicios básicos, incluyendo la vivienda pública, escuelas y transporte público. Más allá del LAPD, los residentes regularmente son objeto de vigilancia excesiva por parte de la policía escolar, la seguridad privada armada, agentes de libertad condicional y el personal del Metro que tienen la autoridad de multar y arrestar a los pasajeros. La presencia policial es desproporcionada en partes del Sur de LA que están pasando por un proceso de aburguesamiento, incluso cuando no hay evidencia de un aumento en actividades criminales. La “hipervigilancia” de las comunidades afroamericanas y de la clase trabajadora genera desconfianza entre los residentes y las fuerzas del orden. Además, el uso de la vigilancia policial de “perfiles raciales” y fichaje y prácticas como el de las “ventanas rotas” contribuye a una profecía auto cumplida, en la cual la policía puede subjetivamente considerar sospechosa cualquier actividad (o incluso la sola presencia) de personas de color como pretexto para el hostigamiento, arresto o hasta acabar



en muerte. Entre investigadores se ha visto que muchos cargos presentados contra los residentes en vecindarios en proceso de aburguesamiento son “violaciones de pobreza” que “no atraerían la atención de la policía si se llevaran a cabo en callejones sin salida de los suburbios, en las casas de fraternidades universitarias o en los muelles de yates de clubes privados.” En esencia, la vigilancia es parte de la agenda del aburguesamiento para sacar a un cierto grupo de personas “indeseables” de los barrios ahora prometedores.

Si bien las fuerzas policiales penalizan la pobreza, el sistema de justicia penal la empeora. A partir de la detención previa al juicio hasta la sentencia, las personas de color inmersas en el sistema de justicia penal, incluso cuando son inocentes, sufren la pérdida de ingresos y su comunidad sufre la pérdida de estabilidad. La vigilancia agresiva obliga a las personas pobres a gastar dinero en fianzas, papeleos y trámites legales, apelaciones, honorarios de abogados y visitas a las cárceles. La mayoría de personas detenidas previo a un juicio tienen cargos por delitos no violentos. Muchas personas permanecen detenidas no porque sean culpables, sino porque no pueden costear los gastos de la fianza. El Sur de LA representaba cuatro de los cinco principales códigos postales en el condado de Los Ángeles por la fianza total más alta recaudada y recargos no reembolsables pagados en 2012-2016. En estos cuatro códigos postales, casi \$17 millones de la comunidad fueron transferidos a las arcas de la industria de seguros de fianzas. Las personas detenidas que no pueden pagar la fianza tienen más probabilidades de aceptar el declararse culpables, incluso cuando son inocentes, para evitar la pérdida de empleos o vivienda ocasionados por la prolongada detención previa al juicio y audiencias frente a tribunales. Y como se mencionó anteriormente, un historial penal perjudica las posibilidades futuras de empleo y vivienda.

Cuando los activistas siguieron el flujo del dinero, descubrieron que aunque el Sur de LA no gastaba la misma cantidad de dólares públicos en programas sociales e infraestructura que otras áreas de Los Ángeles, los gastos públicos en la aplicación de la ley y la justicia penal son desproporcionadamente altos en esta área. Por ejemplo, en 2017 el Metro aprobó un contrato anual entre varias agencias de \$646 millones con el LAPD, el Departamento del Alguacil de Los Ángeles y el Departamento de Policía de Long Beach para la vigilancia policial en el transporte público. Esto se sumó a los \$70 millones que el Metro gastó en la contratación de su propio personal de seguridad y otros \$82 millones para contratar empresas de seguridad privadas. La mayoría de las infracciones y los arrestos son por conductas que no representan un peligro para los pasajeros, como por ejemplo el estar en áreas públicas por mucho tiempo o por no poder pagar la tarifa del Metro. La evasión de tarifas fue la razón principal para que jóvenes menores de 18 años recibieran citatorios en 2015. Sin embargo, se estima que el Metro perdió alrededor de \$5 millones debido a la evasión de tarifas, una pequeña fracción del presupuesto policial. Los activistas argumentan que sería más barato permitir que los estudiantes y trabajadores de bajos ingresos viajen gratis o con descuento, que la creación de un sistema de control policial público y privado para vigilar y disciplinarlos.

Los activistas y organizadores del Sur de LA han estado a la vanguardia en el cambio de rumbo de la represión policial excesiva en barrios de la ciudad. Impulsaron la narrativa de ser fichados, de entrar en la cadena de la escuela a la prisión, hasta el punto en que incluso el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles reconoció los efectos nocivos de sus políticas disciplinarias. En 2007, el Distrito adoptó el Sistema de Intervención y Apoyo para la Conducta Positiva en la Escuela (PBIS, por sus siglas en inglés), como respuesta a la presión por parte de defensores de la justicia educativa. En 2013, el Distrito, nuevamente respondiendo a los activistas, fortaleció el sistema, aprobando la “Carta de Derechos del Ambiente Escolar,” el cual eliminó suspensiones ambiguas a causa del denominado “rebeldía intencional,” a favor de prácticas más alineadas a la justicia restaurativa. Los activistas también presionaron exitosamente al Concejo de Los Ángeles para que enmendara la Ley de Toque de Queda Diurno, que antes de 2012, resultó en el infraccionar a 10,000 estudiantes en Los Ángeles, por ausencia o por llegar tarde a la escuela, el 90% de los cuales eran estudiantes de color y casi la mitad tenían 14 años o menos.

Después de años de organización comunitaria y de impulsar una alternativa a la narrativa de “ley y orden” contra el poderoso interés del orden policial, los activistas del Sur de LA empezaron a ver algunos cambios a su favor en el discurso de las políticas públicas: recientemente, el condado reconsideró la construcción de cárceles para albergar a una población de reclusos con una alta propensión a tener problemas de salud mental, lo que, según defensores, era una forma equivocada de aplicar una solución de justicia penal a un problema de salud pública; existe un creciente apoyo por parte de los tribunales y de la legislatura de California para eliminar las fianzas; el Metro también está considerando diferentes formas de apoyar y cubrir las necesidades de la población sin hogar que encuentra refugio en sus trenes y estaciones sin victimizarlos aún más.

Los votantes, quienes aprobaron la Propuesta 47 en 2014 y la Propuesta 64 en 2016, muestran signos alentadores de apoyo para reducir el castigo por delitos no violentos (o incluso despenalizarlos, en el caso del uso de marihuana) y para reorientar el costo de enjuiciar y encarcelar a un número desproporcionado de personas de color y jóvenes hacia la prevención del crimen y la reinversión comunitaria. Los organizadores, líderes y activistas del sur de LA colectivamente han utilizado estrategias electorales, de promoción de políticas y de alcance, divulgación y provisión de servicios para garantizar que comunidades como el Sur de LA sean priorizados para estos programas.

Racismo Ambiental

Las políticas racistas de vivienda, del uso de la tierra y las leyes laborales, reforzadas por el aburguesamiento, la pobreza y el exceso de vigilancia policial, no solo han determinado (y segregado) en dónde pueden vivir los residentes que por mucho tiempo han vivido en el Sur de LA, sino que también los ha vuelto más vulnerables a la contaminación y a los peligros ambientales en su entorno. Estar expuestos a estos peligros está relacionado a índices más altos de asma, niveles elevados de plomo en la sangre, trastornos cardiovasculares y respiratorios, cáncer, discapacidades de aprendizaje y efectos negativos en el parto. Los datos han demostrado consistentemente que la raza juega un papel importante en las decisiones de ubicación de los usos de terrenos no deseados por parte de los funcionarios públicos y las industrias. En el Sur de LA, como en muchas ciudades, el mayor riesgo de contaminación y daños ambientales se le asigna a las comunidades negras y latinas.

Grandes segmentos circunvecinos al Sur de LA se encuentran entre el 10% de las secciones censales más contaminadas en California. Más de 24,000 residentes del Sur de LA viven a 500 pies o menos de una ruta principal de camiones y están expuestos constantemente a partículas de diésel. Además, más de 21,000 residentes viven a menos de 500 pies de terrenos destinados a otros usos no deseados, como la manufacturación, las grandes bodegas y el almacenamiento y distribución, refinerías de petróleo o plantas químicas. Las investigaciones sugieren que estas cifras se subestiman porque el uso de muchos de los terrenos están clasificados erróneamente en las bases de datos oficiales.

La extracción petrolera en los vecindarios, en particular, es uno de los grandes factores de las malas condiciones de salud y sigue siendo una preocupación creciente para los residentes del Sur de LA. La extracción petrolera en áreas urbanas densas como el Sur de LA requiere técnicas de extracción extremas que producen aguas residuales contaminadas con aditivos químicos y metales pesados. Este tipo de contaminación afecta a los órganos sensoriales (como la piel y los ojos), así como al sistema nervioso, inmunológico, cardiovascular y endocrino, causando cáncer y mutaciones genéticas. La investigación ha revelado que los sitios de extracción petrolera en comunidades de color de bajos ingresos, como el Sur de LA, están generalmente más cerca de los hogares, tienen menos protecciones, como el monitoreo del aire o barreras de contención y presentan más violaciones y quejas registradas. Por ejemplo, en los sitios de extracción del Sur de Los Ángeles, la distancia promedio entre éstos y los lugares de uso más sensible de la tierra (como una casa o escuela) es de solo 85 pies, comparada con una distancia de 570 pies en el oeste de LA.

Debido al aburguesamiento, muchos residentes del Sur de LA han sido orillados a áreas con altas concentraciones de viviendas de calidad inferior o han sucumbido al hacinamiento para evitar vivir en las calles. Estas áreas a menudo se determinan por su proximidad a zonas industriales. En algunos casos, con la desaparición del sector manufacturero en el Sur de LA en las últimas décadas, se construyeron viviendas sobre antiguos sitios industriales. Debido a esto, además de la falta de inversión para



modernizar el inmueble más antiguo, muchas viviendas presentan peligros ambientales en su interior, como el plomo, el mocho y las plagas.

Por si eso fuera poco, el Sur de LA carece del tipo de infraestructura que podría proteger a los residentes de estos peligros. En el Sur de LA, se destinan 0.9 acres de áreas verdes abiertas por cada 1,000 residentes, muy por debajo de la meta de 10 acres establecida por el Concejo, y de todas las áreas de planificación de servicios en el condado, la región tiene las tasas más bajas de acceso a parques.

No obstante, los residentes del Sur de LA han tenido cierto éxito contra los poderosos intereses corporativos que intentaron explotar las vulnerabilidades de la región. La campaña "People Not Pozos" fue capaz de cerrar un sitio de extracción petrolera en el Sur de LA, pero solo con años de intenso trabajo y organización de base, con aliados en agencias legislativas y reguladoras. Recientemente, el Departamento de Urbanización adoptó la Ordenanza "Clean Up Green Up," la cual somete a las empresas nuevas y en expansión a estándares y restricciones de desarrollo más estrictos, que incluyen líneas de retiro y barreras de contención que podrían mantener a los residentes del Sur de LA a una distancia mayor de terrenos peligrosos. Los activistas también están monitoreando la distribución de los ingresos de la Medida A, diseñada para mejorar el acceso a los parques en el condado de Los Ángeles, con el fin de garantizar que el Sur de LA obtenga su parte equitativa de los fondos para expandir los espacios verdes y abiertos.

Los activistas del Sur de LA también se están organizando de manera más proactiva e interseccional. Los programas que aumentan los empleos verdes no solo mejoran el trabajo y las condiciones económicas de los trabajadores en el Sur de LA, sino que también le aportan innovaciones y tecnología sana y segura a la comunidad. Muchas organizaciones comunitarias del Sur de LA con experiencia en transporte y la justicia ambiental y económica, están colaborando para obtener fondos del programa Comunidades de Transformación de Cambio Climático (TCC, por sus siglas en inglés), un programa multimillonario de inversión orientado a las comunidades más desfavorecidas del estado. El programa TCC, con el aporte de activistas de justicia ambiental en el Sur de LA y en otros lugares, requerirá que los proyectos desarrollen no solo programas de reducción de la contaminación, sino también estrategias complementarias económicas, para el desarrollo de la fuerza laboral y contra el desalojo.



EL SUR DE LA ES EL FUTURO

Como se puede ver a lo largo de este informe, el Sur de LA se ha caracterizado durante un siglo por una historia de decisiones políticas que privilegian a las corporaciones, los desarrolladores y los residentes blancos a costa de las personas de color y de clase trabajadora. Con el respaldo de los funcionarios públicos y las fuerzas del orden, las políticas públicas han llevado al abandono, la criminalización, la exclusión y el desalojamiento de las comunidades negras y latinas, y siguen siendo la base sobre la cual se siguen perpetrando las desigualdades raciales y económicas hasta la actualidad. Por necesidad, el Sur de LA se ha convertido en terreno fértil para el desarrollo de organizaciones y alianzas fundamentadas en visiones y principios comunitarios. Los organizadores comunitarios y los líderes de base han sido pioneros en el desarrollo de estrategias y herramientas organizativas para el movimiento social, han cambiado las narrativas principales que devalúan la humanidad de los residentes del Sur de LA y han construido una base más amplia de poder electoral y político. De esta manera, el Sur de LA ofrece una visión progresista única para el futuro.

Los poderes contra los que está luchando el Sur de LA son poderes arraigados, implacables e influyentes. Ciertamente, todavía tenemos un largo camino por recorrer para construir el poder en la escala y con el alcance necesario para abordar las causas profundas de la inequidad. Sin embargo, al ofrecer un análisis interseccional de estas causas, este informe identifica cómo interactúan múltiples sistemas para mantener la desigualdad en el Sur de LA. Al hacerlo, este informe sirve como un llamado a la acción para los líderes comunitarios actuales y futuros, así como para nuestros aliados en la filantropía y el gobierno. Por último, el futuro del Sur de LA radica en fortalecer un movimiento interseccional para el cambio social enraizado en el Sur-Centro.